Certificación de programas informáticos de caja registradora

Esta página solo se refiere a las empresas europeas. En Francia, se rige por el art. 286, I-3° bis del CGI.

El certificado de conformidad del software de caja registradora se obtiene a través del botón "Imprimer «el certificado» de la extensión CAISSE TACTILE.

También puede descargarlo desde

este enlace

.

Para más información

En Francia, la legislación al respecto es cambiante, influida por los distintos grupos de presión que tienen intereses en ella. Aunque en el verano de 2025 se decidió que las cajas debían estar certificadas, la Asamblea Nacional señaló finalmente la inutilidad de esta obligación y suspendió su aplicación durante un año (en lugar de simplemente suprimirla). Sin embargo, según el communiqué comunicado de la DILA del 24 de febrero de 2026, este proyecto ha sido anulado. Hasta su próxima reactivación, probablemente...

Orígenes de la obligación de certificación



La normativa sobre la certificación de los programas informáticos de caja tiene su origen en Austria e Italia, países que tienen dificultades para recaudar el IVA, sobre todo debido a la importancia de las transacciones en efectivo.

Una vez que esta particularidad se puso en conocimiento de las instancias europeas, estas emitieron la directive 2014/55/UE, que incluye varias directrices relativas al IVA, entre ellas la implantación de una certificación para los programas informáticos de caja registradora.

Esta directiva se transpuso a la Ley de Presupuestos de 2016, que estableció la primera versión de esta obligación de certificación, que debía aplicarse a los *«programas informáticos de gestión»*, imponiéndoles requisitos *«de inalterabilidad, seguridad, conservación y archivo de los datos»*, en parte imposibles de cumplir: de hecho, es imposible que un desarrollador de software ofrezca garantías absolutas cuando los datos no se encuentran en sus servidores.

En junio de 2017, los servicios ministeriales se dieron cuenta de que era absurdo aplicar esta restricción a las empresas que no facturan IVA (en Francia, de las aproximadamente 750 000 empresas que se crean al año, 500 000 son microempresas que no facturan IVA), así como a los programas de gestión que no incluyen funciones de registro de ingresos y gastos. Se decidió entonces modificar las disposiciones reglamentarias para excluir a las empresas que no facturan IVA y limitar su ámbito de aplicación únicamente a los programas informáticos sujetos al IVA, identificados para la ocasión con el término *«programas de caja»*.

El artículo 88 de la Ley n.º 2015-1785, de 29 de diciembre de 2015, de Presupuestos para 2016, modificado por el artículo 105 de la Ley n.º 2017-1837, de 30 de diciembre de 2017, de Presupuestos para 2018, establece la obligación para los sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que impone dicha certificación, entró en vigor el 1 de enero de 2018, sin haber previsto que no existía ninguna definición fiscal del *«software de caja»*, lo que provocó el pánico entre muchas empresas

ante esta ambigüedad legislativa, pánico que algunas empresas aprovecharon hábilmente para generar ventas no necesariamente útiles...

Finalmente, seis meses después, la DGFIP ofreció una definición de *software de caja*, publicada en el BOFIP del 4 de julio de 2018 (a continuación).

La AFNOR formalizó esta obligación reglamentaria en la norma NF525, que resulta especialmente engorrosa. Afortunadamente, el Gobierno ha precisado, mediante el artículo 88 de la Ley de Presupuestos n.º 2015-1785, que los editores de software tendrían la posibilidad de emitir una autocertificación que acredite la conformidad del software con las disposiciones legales.

Evolución reciente de la obligación de certificación

La Ley de Presupuestos de 2025, aprobada también de forma precipitada, suprime esta posibilidad de autocertificación.

A partir del 1 de septiembre de 2025, se exigirá a los editores, bajo pena de multas muy elevadas (45 000 euros por cada certificación emitida), que obtengan una certificación de INFOCERT o del LNE, con unos costes que oscilan entre 10 000 y 20 000 euros para la certificación inicial, y 5 000 euros de renovación anual. Además, se exige a todos los comerciantes afectados que cambien de software por uno homologado por cualquiera de estos organismos.

Estas cantidades resultan prohibitivas para muchos editores, por no hablar de la considerable carga de trabajo que supone una norma innecesaria. Por otra parte, hacer obligatoria esta certificación obliga a los actores a someterse a un duopolio formado únicamente por INFOCERT y LNE, siendo cualquier situación de mercado cautivo, en sí misma, motivo de recelo.

Varios aspectos de este asunto son especialmente kafkianos:

- La certificación de los programas informáticos de caja tiene como objetivo —en teoría— resolver un problema que no existe en Francia.
- No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la eficacia de las disposiciones de la Ley de Presupuestos de 2015 para el periodo 2018-2025.
- Aunque se ha barajado una cifra de entre 6 000 y 10 000 millones de euros en fraude del IVA, no hay datos públicos que permitan atribuir una parte significativa de esa cantidad a programas informáticos fraudulentos. Más bien al contrario, el 3 de junio de 2025, el Gobierno respondió a la pregunta escrita n.º 3394 (Charles de Courson): de 4.000 inspecciones realizadas en tres años, solo se sancionó un caso de uso de software fraudulento.
- El Ministerio de Economía reconoció en febrero de 2024 que no hay pruebas que demuestren que el anterior régimen de autocertificación hubiera favorecido ningún tipo de fraude, y que la certificación de un programa informático no constituye una garantía de veracidad de las cuentas.
- La forma más sencilla de defraudar el IVA es llevar una contabilidad doble... ¡con dos programas certificados!
- El coste desproporcionado de la certificación amenaza directamente el equilibrio económico de numerosos editores de software, lo que, además, provoca efectos de distorsión de la competencia.
- Esta obligación, que obliga a miles y miles de comerciantes a cambiar su software de caja, supone una nueva carga para las empresas, totalmente innecesaria, ya que no aportará ningún valor.
- La transposición excesiva de las directivas europeas es la mejor forma de convencer a los

últimos reticentes de que tiene sentido salir de Europa.

Situación actual

La Collectif TPE exige la retirada de esta nueva obligación o, como mínimo, el retorno al régimen anterior de autocertificación.

Una pétition ha reunido 17 936 firmas hasta la fecha.

Hemos escrito una carta al diputado del distrito 17 de París.

En cuanto a Gestan

Hemos seguido muy de cerca la evolución de este asunto y, tras leer los textos iniciales (antes de que la DGFiP estableciera la definición de «software de caja»), nuestra interpretación era considerar Gestan como un software de gestión y no como un software de caja: lo que significaba que, en el sentido comúnmente aceptado de *«software de caja»*, a falta de una definición fiscal oficial, los usuarios de Gestan no necesitaban el certificado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Presupuestos de 2016, salvo que utilizaran la extensión Caisse Tactile, que nos parecía entrar dentro de la denominación «software de caja».

La definición del BOFiP confirma nuestra interpretación inicial: Gestan Dado que no permite registrar pagos fuera de la contabilidad (en cuanto se registra un pago en Gestan, se genera automáticamente un asiento contable), Gestan no se ve afectado por las disposiciones que se aplican a los «programas de caja».

No obstante, dado que Gestan puede utilizarse en la fase de precontabilidad, y con el fin de evitar problemas derivados de una interpretación diferente, hemos integrado en Gestan los mecanismos técnicos de trazabilidad de las modificaciones de los registros, a partir de la versión 15.00 lanzada el 1 de enero de 2018.

Independientemente de si se utiliza o no la extensión «Caja táctil», el mecanismo de trazabilidad ahora integrado en Gestan registra cualquier creación, modificación o eliminación en los archivos contables. Además, en la extensión «Caja táctil» se ha añadido un botón que permite imprimir el certificado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Presupuestos de 2016, que podrá presentar en cualquier inspección.

Sin embargo, si se confirmara la revocación de la posibilidad de autocertificación, la extensión «Caja táctil» ya no podría utilizarse en Europa. De hecho, el coste de la certificación no resultaría rentable.

Esta ley se conoce a veces con el nombre de *«ley antifraude»*, término que nos negamos a emplear.

De hecho, esta denominación responde, una vez más, a una estrategia de marketing político, en la medida en que:

- ninguna ley impide el fraude: lo que hace es definir sus límites. Lo que es «antifraude» son los agentes de las fuerzas del orden, los inspectores, las cámaras de vigilancia, las barreras y, sobre todo, el sentido cívico, etc. Pero no la ley;
- esta denominación impone una presunción de culpabilidad sobre toda empresa, a la que se

supone fraudulenta a priori. Ahora bien, esta sospecha es en sí misma contraria a la presunción de inocencia consagrada en la ley;
- este término da a entender que dicha ley sería capaz de erradicar el fraude, con el fin de conferirle un carácter indiscutible, lo cual es, evidentemente, una tontería.

Al igual que hacen algunos industriales que practican el «greenwashing» o el «pink-washing» a bajo coste, adoptar títulos de leyes contradictorios por motivos de marketing político (como en el caso de la llamada «fiscalidad ecológica», que va a engrosar las arcas del Estado mucho antes de preocuparse por la ecología, del «impuesto de Pentecostés», que debía destinarse a las personas mayores, pero que estas nunca han visto, o de la «ecotasa», que debía permitir el mantenimiento de las carreteras; los ejemplos son numerosos), supone un uso deliberado de la semántica como herramienta de propaganda.

Es lamentable que este marketing burdo, al igual que la inadecuación de los medios respecto al objetivo oficialmente perseguido y, por lo tanto, la multiplicación de restricciones innecesarias, sea uno de los elementos que contribuye a generar un auténtico sentimiento anticívico y antieuropeo.

Véase al respecto :

- https://www.economie.gouv.fr/logiciels-caisse-certifies-administration-fiscale-precise-dispositif
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_caisse.pdf
- https://www.lne.fr/sites/default/files/bloc-telecharger/referentiel-certification-systemes-caisse.pdf
- https://www.appvizer.fr/magazine/finance-comptabilite/gestion-de-caisse/logiciels-et-systemes-de-caisse-prets-pour-la-loi-anti-fraude-a-la-tva
- http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704
- https://wpformation.com/woocommerce-loi-anti-fraude-tva

Definición de «software de caja registradora» por parte de la DGFIP

Hubo que esperar seis meses desde la fecha de entrada en vigor de la ley para que la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) publicara en el BOFIP del 4 de julio de 2018 una definición de software de caja registradora. El texto del artículo I-B-30 especifica lo siguiente:

```
Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une
fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer
extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de
marchandises ou de prestations de services c'est-à-dire que le paiement
enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement
la passation d'une écriture comptable.

Ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit
le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système
déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans
intervention humaine, une écriture dans le système d□information comptable.

Sont visés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant
l'enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de
```

```
règlement (espèces, chèques, CB, virements, prélèvements...).

Cette obligation s'applique y compris en cas d'enregistrement sur un
logiciel ou système accessible en ligne.
```

La definición de la DGFIP es especialmente pertinente por su conformidad con el espíritu de la ley: la intención del legislador era, efectivamente, establecer medidas relativas a los programas de caja independientes del software de gestión de la empresa. El ejemplo típico es una caja registradora táctil utilizada por un vendedor en un mercado, que le permite emitir tickets de caja y registrar pagos, y cuyos resultados (el ticket Z) se registran al final de la jornada en el sistema de gestión de la empresa.



Otros artículos sobre «Contabilidad»

Affectations comptables automatiques
Arrêtés de TVA
Balance
Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse
Clôture comptable / Exercices comptables
Comptabilisation des DEEE
Comptabilisation des écritures
Comptabilité avec Gestan : principes de base
Comptabilité en partie double
Compte bancaire et de caisse
Compte de résultat
Créances irrécouvrables
Encaissements/Décaissements
Export CFONB
Export SEPA
Export XIMPORT des données comptables
Facturation par taux de taxe
Grand Livre
Immobilisations
Imputations comptables
Journal
Journaux comptables (codes)
Lettrage
Liaisons comptables
Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
OD (opérations diverses)
Options des documents comptables
Paramétrage comptabilité
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage TVA

Produits et Charges
Rapprochement bancaire
Relevés de compte bancaire
Remise de chèques
Revue des écritures
Soldes de gestion
Taux de TVA
Ticket Z
Trésorerie prévisionnelle *
Trésorerie simplifiée
Ventilation des factures par échéances
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/nf525

Last update: **2026/10/23 14:38**